

[Perú]

REALIDAD Y SENSACIONALISMO: UNA PARADOJA PERUANA

El sensacionalismo ha marcado escuela en la prensa escrita y audiovisual de Perú, tanto que su capital cuenta con el récord de diarios y canales de televisión en tono de escándalo. La mayoría sobrevive pese a sus tirajes reducidos y sus bajos niveles de sintonía, gracias a que enfatizan una realidad que se parece más a Macondo y que se basa en una falsa premisa: prensa es poder. No es extraño entonces que miedo y seguridad sean dos temas que van de la mano en Perú y que sensacionalismo y realidad no vayan juntas.

Luis Jaime Cisneros Hamann

ljcisneros@hotmail.com

Es periodista y trabaja en Perú como corresponsal de la agencia internacional de noticias Agence France Presse (AFP). Además es columnista de El Comercio, diario de referencia en Perú, profesor universitario, panelista de Radio Programas de Perú, colaborador de la BBC-radio y de la ONG humanitaria basada en Francia, Reporteros sin Frontera. Ha sido presidente de la Asociación de Prensa Extranjera del Perú.

Vivir en el Perú puede equivaler a generar nuevos miedos. Esa parece ser la idea matriz que brota como espuma cada vez que uno mira y oye atentamente los telediarios de la televisión peruana. Como en una novela de Stephen King, la sangre salpica a medida que la historia se desarrolla. Sólo que en este caso, lo hace desde las pantallas de la célebre caja boba. Y todas las noches, sin pausa y sin prisa, ante un televidente virtualmente atrapado, quizás empijamado y sin escapatoria, los cuatro principales canales de televisión de señal abierta locales difunden a la misma hora, a partir de las 10 de la noche, sus noticieros centrales.

Si usted no vive en uno de los más de 300.000 hogares que disponen de señal televisiva de cable, por el que se paga el equivalente a unos 40 dólares mensuales, no tiene alternativa, y debe hacer frente a los 60 minutos de mayor impacto en la psicología colectiva de un país con 27 millones de habitantes. Un país marcado por profundos contrastes sociales, con una tasa de pobreza de un 44% y con uno de los peores indicadores de educación pública en América Latina y el Caribe, superado sólo por Haití y Bolivia. Un país que ha colocado en la cresta de la ola de sus principales preocupaciones la inseguridad ciudadana en que vive, como consecuencia del auge de la delincuencia y del crimen organizado, en medio de uno de los períodos de crecimiento y bonanza económica más prolongados de su historia republicana, que ubicó a Perú a un paso del codiciado grado de inversión en un trayecto digno de una montaña rusa para un mandatario como Alan García, que dos décadas atrás, en su primer mandato (1980-1985), lo condujo al oscuro círculo de los países parias de la comunidad financiera internacional por no pagar sus deudas.

Noticias ilimitadas

Pero en el Perú del 2007 la sensación latente es que cada día la violencia urbana se expande, haciendo que ésta forme parte del paisaje cotidiano. Y frente a esta embestida, el Estado peruano no ha podido articular una respuesta exitosa que siquiera contribuya a controlar la creciente inseguridad que se apodera de los peruanos.

Un botón como ejemplo ilustra el grado de ineficiencia estatal: durante todo el año 2007 el Estado peruano, que atraviesa una de sus etapas más prósperas en los últimos 30 años, ha sido incapaz de comprar un solo patrullero para las fuerzas policiales. En dos ocasiones abortó la adquisición de más de 600 patrulleros por problemas de corrupción. Y el escándalo le costó el puesto, al menos, a un ministro del Interior. Todo ello, a pesar de la urgencia para contar con esos vehículos para hacer frente al auge de la delincuencia, que aprovecha la avalancha informativa sobre carencia de unidades motorizadas en buen estado, para sacar ventaja de esa condición. La situación llegó a tal extremo que el gobierno evaluó comprar caballos desde Argentina, para relanzar el servicio de la policía montada y recorrer al galope algunos de los barrios más peligrosos de Lima.

La crónica roja

El día a día, la pauta de la noticia lleva la impronta del hecho policial. Más del 50% del contenido de los teleinformativos se relaciona con actos de la delincuencia común, del crimen organizado (narcotráfico, bandas de secuestradores), hasta los casos de crímenes del corazón, abortos, suicidios, linchamientos colectivos y violaciones, sin dejar de lado los casos de protagonistas insólitos de la noticia que harían las delicias de Ripley.

Una agenda que impulsan con evidente ánimo informativo, pero que lejos de sensibilizar a la opinión pública para crear conciencia sobre la urgencia de enfrentar estos delitos de manera organizada, ha contribuido a fomentar una sensación de impotencia y también de desconfianza hacia las autoridades, haciendo que prime el sensacionalismo y la desmesura por el hecho policial.

Dicho esto, si usted es extranjero, duerme en Lima por primera vez y se enteró por la televisión de lo que ocurre cotidianamente en Perú, puede que se acueste con la impresión de estar asistiendo al rodaje de una película de Quentin Tarantino, donde la violencia cotidiana es, en este caso y en sus múltiples versiones, la locomotora de todo tipo de noticia.

Esta tendencia no es nueva, y está asociada al sensacionalismo que reina en la prensa diaria desde hace más de dos décadas. El gusto reporteril por temas de seguridad alcanzó cuotas históricas durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). En ese lapso, las autoridades tejieron una red de corrupción que compró medios de comunicación (televisión y prensa diaria) a quienes pagó para sesgar la información o difamar a sus enemigos políticos. De ese modo, el rol de mensajero de la prensa consistía en crear las condiciones para que los peruanos justificasen, mediante encuestas de opinión públicas mandadas a hacer por las autoridades, la política de mano dura y represión policial que caracterizó el popular estilo de gobierno de Fujimori.

Esa prensa que vendió su línea editorial y privilegió la información al gusto del poder de turno, desplazó los temas políticos por los de corte policial y creó además las populares “cortinas de humo”, todo un género periodístico en alza en ese entonces, con imágenes de vírgenes que lloran y desataban oleadas de fervor entre los creyentes.

Inseguridad y *rating* televisivo

En el Perú de 2007 informar se sigue confundiendo con niveles de sintonía para lo cual la televisión dramatiza los casos de la vida real que no deberían llegar en situaciones normales a ser considerados como hechos noticiosos. La cobertura noticiosa refuerza la percepción de que la violencia se intensifica y de que sólo practicándola uno puede ganar un espacio público para dar a conocer una determinada situación

o drama de la vida real. Así, la televisión en lugar de sensibilizar ha terminado por banalizar a la violencia urbana.

De este modo, la prensa peruana ha creado una especie de paradoja: en su afán por informar sobre los esfuerzos de las autoridades para revertir la situación de inseguridad refuerza la percepción en la ciudadanía de que la seguridad es cada día más precaria. Esta tendencia irónicamente alimenta los instintos más salvajes de supervivencia “civilizada” de los peruanos y crea las condiciones para que las autoridades gubernamentales propongan drásticas sanciones como la pena de muerte a los violadores de menores de edad o a quienes cometan actos terroristas, como sugirió el presidente peruano Alan García en sus primeros meses de gestión en el segundo semestre de 2006.

Luis Benavente, director del Grupo de Opinión de la privada Universidad de Lima, comparte esta inquietante apreciación. Y da algunas pistas para sustentarla. Empezando por un sondeo realizado en marzo de este año sobre la situación de la violencia en el Perú, (hecho por la Universidad de Lima en la capital peruana, donde vive un tercio de la población de Perú), que presenta a los telediarios como virtuales promotores de la inseguridad, imbuidos en una carrera salvaje por mantener una antena caliente a costa de una sobredimensionada cuota de sangre en una ciudad que por sus índices de violencia se ubica por debajo del tercio superior de las más violentas de América Latina. Lima no es Sao Paulo, no es Caracas, no es Medellín o Cali, como tampoco alcanza los niveles de México. En Lima cada cinco minutos se produce un delito, según datos de la policía.

Sondeos y noticias: el perro de Pavlov

Según el sondeo de la Universidad de Lima, un 74,9% de limeños cree que la violencia ha crecido en los últimos años y que la televisión en señal abierta es el medio que más la incita. Las cifras son demoledoras y no dejan lugar para la duda: un 86,3% de los consultados (sobre un universo de 613 personas con un nivel de confianza de 95%) cree que los medios de comunicación incitan a la violencia, 12,6% las limpia de responsabilidad y un 1,1% no opina.

Casi al final de la primera década del siglo XXI en el Perú, la televisión sigue siendo la reina de los hogares, a pesar de la incursión de Internet en el olimpo del mundo del entretenimiento. Esa condición explica que un macizo 58,2% de limeños afirme que la televisión es el medio que más incita a la violencia, seguido de la oferta de Internet con un distante 21,3%.

A la hora de observar en detalle esta fotografía panorámica sobre la relación entre prensa y violencia, la descripción de los programas de televisión que más inducen a la agresividad en la sociedad son los llamados *talk-shows* o *reality show*, con un 38,5% de menciones. La posición privilegiada de este género televisivo tiene en Perú como su emblemática figura a la animadora Laura Bozzo, una desenfadada platinada que transpuso

fronteras con su estilo sensacionalista y populachero hasta alcanzar sus 15 segundos de fama cuando laboró en la cadena estadounidense de habla hispana Telemundo.

Detrás de ellos, la población percibe a los noticieros (30,6%) como el segundo factor que contribuye a encender la chispa en la pradera. Los telediarios son además, de lejos, el programa favorito de más del 41% de limeños encuestados, muy por delante de los programas culturales que aparecen en segundo lugar con un 18% de preferencias.

Otra encuesta de la misma Universidad, de mayo de 2007, resaltó que un aplastante 92,7% de interrogados representativos de la población limeña suele ver noticieros y programas políticos en la televisión. Lo paradójico es que los niveles de confianza parecerían contradecir los niveles de sintonía: un 33,7% de consultados confía en los telediarios, en tanto que un 63,5% asegura confiar poco en ellos y un 1,2% no les cree pero ni una palabra de lo que dicen. “Los noticieros empiezan con notas policiales, las películas son casi todas de violencia, y programas como los *talk-shows* también muestran escenas violentas”, indica Benavente para justificar esta especie de adicción por el género de los peruanos.

Hechos y deseos

No sorprende que este clima de falta de seguridad sea uno de los elementos, junto con el desempleo, que menciona con mayor insistencia la población para justificar su decisión de emigrar al extranjero en busca de mejores condiciones de vida. Cifras conservadoras indican que mensualmente al menos mil peruanos dejan el país.

Este ambiente mediático sirve además de tensión permanente para mantener latente la sensación de desconfianza hacia la policía, sea porque ésta es impotente para hacer frente al delito debido a sus recursos limitados o porque la población la percibe como corrupta y no acude a ella en busca de ayuda. Esta tendencia se volvió un lugar común en el país: un grueso de los robos/asaltos que se producen a diario no son denunciados por las víctimas, sumidas en el desaliento de que esa gestión es una pérdida de tiempo. Un error que conduce a otro pues es sabido por los especialistas que las denuncias engrosarían las estadísticas y ayudarían a trazar una real radiografía de los niveles de inseguridad que se registran en ciudades como Lima. Las estadísticas a su vez sirven para trazar estrategias para hacer frente al delito, identificando zonas, modalidades de robos, tipo de víctimas y perfil del delincuente, entre otros elementos.

Esta situación hizo que el grupo Apoyo, una institución privada de tinte neoliberal que ayuda a elaborar propuestas de políticas públicas, realizara encuestas de “victimización” para tratar de obtener un retrato más fiel sobre el nivel de violencia en el Perú. Estos sondeos, anónimos por cierto, recogen datos entre la población víctima de agresiones o robos y que nunca denunció el hecho ante la autoridad policial. Los resultados son entregados luego a la policía.

Gabriel Ortiz de Zevallos, directivo del Grupo Apoyo, coincide en que los telediarios son el motor de una dinámica de violencia que no contribuye a crear

niveles de confianza, y fomentan una mayor inseguridad en su afán por cubrir todo el abanico de hechos violentos que se puedan registrar en una ciudad tan amplia y elástica socialmente como Lima.

Una reciente encuesta de ‘victimización’ de Apoyo, solicitada por el Ministerio del Interior, confirmó que en Lima el binomio delincuencia/falta de seguridad es el segundo mayor problema para la población (50%) superado por el tándem desempleo/falta de trabajo (85%). Una encuesta difundida por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana señaló que un 80% de las personas víctimas de un robo o secuestro por horas no lo denunciaron por temor o desconfianza en la policía.

No es gratuito que a fines de 2006 la entonces Ministra del Interior, la neuróloga Pilar Mazzetti revelara, con una transparencia insólita, que al menos un 20% de los agentes de la policía peruana estaban comprometidos en actos de corrupción.

Perú: país superlativo

La desmesurada cobertura mediática a las noticias de índole criminal y social contribuyó notablemente a extender a la televisión el perfil sensacionalista de la prensa escrita, convirtiendo al Perú en uno de los países de América Latina con mayor devoción por un género que representa todo un homenaje a la desproporción informativa y a la onomatopeya.

Al privilegiar el ángulo sensacionalista apurada por lograr mayores niveles de sintonía, la prensa televisiva asoció el auge de la delincuencia con escasez de policías, evitando generar un debate sobre políticas de seguridad. La competencia entre los telediaros se tradujo al burdo principio de quién mostraba más sangre en la pantalla. Este escenario condujo a que el gobierno peruano redujera la estrategia de seguridad a una simplificación: a mayor cantidad de policías en las calles para vigilar las ciudades, más posibilidad de hacer frente exitosamente al auge de la delincuencia y del crimen organizado.

La percepción generalizada, gracias a la televisión, de que el tema de la seguridad ciudadana se estaba convirtiendo en la piedra en el zapato del gobierno de Alan García llevó a las autoridades a sacar cartas bajo la manga sin encontrar resistencias ni fomentar debates. Así, por ejemplo, se anunció que en el 2007 se incorporaron 5.700 nuevos policías para luchar contra la delincuencia 1.500 de los cuales cumplían funciones administrativas detrás de un escritorio en las comisarías y 4.200 egresaron de las escuelas de policía.

Ya desde el segundo semestre del año 2005 las autoridades peruanas enfatizaban que venían reforzando la seguridad ciudadana para hacer frente al auge de la delincuencia. Ese año, el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) señaló que reduciría en 30% la custodia policial a las autoridades para enviar a patrullar en las calles a los agentes del orden.

La ‘camita’ para la mano dura

La intoxicación informativa propiciada por los telediarios devino en el trampolín para favorecer propuestas de políticas represivas severas. Esta tendencia se ha mantenido en los dos últimos gobiernos de Perú: el de Fujimori (1990-2000) y el actual segundo mandato presidencial de Alan García, quien como su antecesor propuso sin éxito reimplantar la pena de muerte, abolida hace más de dos décadas y vigente sólo para casos de traición a la patria en caso de conflicto externo, o propuestas que amenazan limitar libertades públicas, como la que se esconde detrás de un toque de queda para combatir el auge de la delincuencia (2004).

Los sondeos muestran una tendencia a favor de estas alternativas desde por lo menos el 2004: más del 60% de limeños apoyaba entonces reimplantar la pena de muerte para delincuentes de extrema peligrosidad. Y el toque de queda en determinados barrios de la capital asomó como una opción válida para casi la mitad de la población limeña.

Paralelamente la impotencia de las autoridades por frenar la delincuencia y la desconfianza en la policía abrió las puertas a una peligrosa alternativa popular de justicia: los linchamientos de ladrones. Esta sanción adquirió una mayor dimensión cuando la televisión comenzó a informar profusamente de estos castigos y llegó a extremos de barbarie cuando pobladores enardecidos pasaron de los golpes a quemarlos vivos, hartos de ver como la policía liberaba luego a los ladrones porque la legislación peruana impide condenar a alguien por un robo menor, como por ejemplo un ave de corral o un televisor.

Nadando contra la corriente

El desaliento que genera el sensacionalismo televisivo respecto a la seguridad entre los peruanos de a pie (ciudadanos) encuentra una isla: el Instituto de Defensa Legal (IDL). Esta ONG, especializada en defensa de los derechos humanos, organizó una campaña para ayudar a las autoridades a diseñar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. El IDL basó su trabajo en sus investigaciones sobre este tema, e incluso algunos de sus integrantes se desempeñaron como altos funcionarios del Ministerio del Interior durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

Gradualmente desde el 2003, el IDL, que cuenta con el apoyo financiero de instituciones estadounidenses, fue involucrándose en el tema hasta crear un área de seguridad ciudadana entre sus unidades de trabajo. Esta unidad encomendó sondeos sobre percepción de la violencia urbana, victimización (índices de delito no denunciados) y desempeño de la policía para entregarla a las autoridades responsables del orden público de cara a que hagan una evaluación sistemática del problema.

El IDL fue, de este modo, la primera organización que se involucró en el tema de seguridad ciudadana desde la sociedad civil. Y lo hizo con una finalidad fundamental,

según la investigadora Susana Villarán, ex defensora del Policía: “para poder hacer un seguimiento y fiscalización de políticas públicas en esa materia desde una perspectiva de derechos humanos”.

Los sondeos permitieron al IDL introducir en los medios de prensa locales bajo un punto de vista no precisamente policial ni judicial, un tema que golpeaba a todos los sectores sociales. El eje de esa estrategia giraría sobre los sondeos. Por ejemplo los de victimización servirían para medir la incidencia real del delito, unos sobre percepción de inseguridad ayudarían a saber cuán seguro se siente uno así como su evolución (o involución) cada seis meses y, finalmente, un sondeo sobre confianza en las autoridades policiales, que permitiría conocer la credibilidad sobre las autoridades encargadas del orden y seguridad.

Este tridente de sondeos se convirtió en uno de los principales aportes del IDL y lo puso bajo los reflectores, perfilándose desde el 2003 como el primer laboratorio civil en analizar la problemática de la seguridad ciudadana en un contexto de desconfianza hacia las fuerzas de seguridad y, sobre todo, del incremento de la delincuencia.

Los sondeos le permitieron al IDL crear patrones para tomarle el pulso a Lima, la capital peruana con 8 millones de habitantes (de los cuales dos millones viven sin agua potable), y tener lista una radiografía por estratos sociales de la actitud de la población hacia un tema que devino en el mayor dolor de cabeza de los peruanos: la seguridad.

Este mecanismo de análisis abriría las puertas para alcanzar aportes sobre las políticas públicas de seguridad ciudadana y permitiría apreciar si el sistema funciona en la práctica, con la aplicación de las recomendaciones que se formulen. Ello la convertiría en una de las pocas organizaciones peruanas dedicadas al tema.

Además, desde el 2006 el IDL puso en marcha un servicio informativo en Internet dedicado a los destapes periodísticos ligados al tema de seguridad. Esta rama funciona como complemento del “laboratorio” teórico y es un área clave porque está a la caza de casos de corrupción que denuncia desde el ciberespacio. Ese servicio informativo y de investigación sobre seguridad ciudadana, tiene como responsable al periodista peruano Gustavo Gorriti.

El pensamiento guía del IDL en este tema es que, según sus propias palabras, proveer de información periódica y de calidad a las autoridades debe servirles de estímulo para que sean eficientes y eficaces al momento de combatir a la delincuencia. Un estudio de febrero de 2007 en Lima sobre percepción del delito elaborado por la encuestadora Imasen para el IDL refleja la evolución de la sensación de inseguridad que asfixia a la población de Lima, sin distinción de estratos sociales. Dicho reporte resalta a leguas que la principal preocupación de los limeños es el robo en las calles (80%), seguido por el temor de ser víctima de la agresión de las pandillas juveniles (55%). El consumo y la comercialización de drogas ocupa la tercera casilla (40,9%) y el robo a las viviendas (26,3%) el cuarto lugar.

El incremento de la violencia y el mensaje que reciben a través de los noticieros de la televisión, sumado a las dificultades logísticas de la policía (falta de personal, escasez de armas, insuficiencia de patrulleros para vigilar las principales ciudades) para hacer frente al problema ha contribuido a que los peatones vivan a la defensiva cuando transitan por Lima, según el sondeo. A un 48,8 % le preocupa que le roben o lo asalten con arma de fuego, a un 16,7% que le ataque una pandilla o que se vea afectada por una pelea entre pandillas y un 14,8% teme que le roben alguna prenda de vestir que lleve consigo.

Policía privada

La falta de policías ha derivado a su vez en que cada vez es mayor la cantidad de gente que recurre a vigilantes particulares, lo que a mediano plazo provocará a su vez la privatización de este cuerpo de seguridad, una situación que en la práctica ya se da virtualmente con decenas de compañías privadas de seguridad.

En esta perturbadora percepción ha tenido también que ver el impacto mediático de los secuestros, un delito que se ha vuelto una industria en el mundo del hampa peruano y que en la mayoría de los casos se planifican desde las cárceles donde se hallan detenidos los cabecillas de las bandas que han hecho de este delito un modo de vida, a veces con complicidad de agentes corruptos de la policía.

La propuesta del IDL

En uno de los escasos estudios publicados sobre el tema (Delito e inseguridad ciudadana, IDL, LIMA 2007), Carlos Basombrío enfatiza que para que el Estado enfrente estos problemas debe aplicar políticas públicas eficaces. Y para que ello sea posible, se requiere, entre otros desafíos, contar con información adecuada sobre los hechos delictivos que golpean a los ciudadanos así como la percepción de la acción policial. Y los datos oficiales con que cuenta hoy la policía son insuficientes para este fin por falta de rigor y de profesionalismo.

Basombrío enfatiza la necesidad de contar con encuestas de “victimización” porque éstas “buscan aproximarse más a la realidad de los hechos que a lo que la población piensa que está ocurriendo”. “Y en eso estamos en cero”, remata. Entre la penúltima encuesta de 1998 y la más reciente, de 2005, pasaron siete años. Toda una enorme ventaja para los enemigos de la ley. Y la dramatización de la realidad que hacen a diario los noticieros es como ser subcampeón mundial de fútbol: sólo sirve para la foto del recuerdo y para amargarse, no para elaborar una estrategia o celebrar una victoria.

Con sus innovaciones y su incursión en la Internet, el ILD ha buscado darle un sesgo de reflexión a un tópico que la prensa peruana ha relegado a la crónica sensacionalista y a la anécdota. Y también ayudar a combatir a la corrupción, denunciando casos que involucran a quienes en nombre de la seguridad sobrevalúan compras, miran al costado o reciben sobornos del narcotráfico por dejar de hacer su trabajo.

Los enfoques del IDL pueden despertar adhesiones o rechazo, pero tienen la virtud de demostrar en negro sobre blanco las fortalezas y debilidades de los peruanos para abordar un tema tan complejo en un país que cambia de rostro sin dejar aun de lado las enormes desigualdades sociales, a pesar de sus prósperos indicadores de crecimiento.

El tema de seguridad ciudadana es un reclamo popular en Perú. La prensa de este país tiene un enorme desafío con su misión informativa para contribuir a crear conciencia clara de que se trata de una tarea colectiva, donde no debe primar el egoísmo. Formar opinión resulta en ese contexto un arma decisiva. Y hacia esa dirección no se llega con un rumbo diletante, donde se privilegie la cantidad de muertos por la calidad de la información empujados por la sinrazón del *rating* o nivel de sintonía impuesto por una feroz competencia. El papel de la prensa debe de ser proveer las herramientas informativas que ayuden a identificar los problemas de cara a prever y corregir sus causas, antes que castigar las consecuencias. Pero aquí ya vamos a lo estrictamente político. Y en realidad, cabe preguntarse, en qué medida la labor periodística es, o debe ser, una tarea de gran responsabilidad política.